

**RE: NOTIFICACIÓN AUTO ADMISORIO DE DEMANDA RAD. No.  
47001310500520230032200**

Mauricio Andres De Santis Villadiego <mdesantis@procuraduria.gov.co>

Mié 31/01/2024 10:17

Para: Juzgado 05 Laboral Circuito - Magdalena - Santa Marta <j05lcsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (260 KB)

31 ENE Intervención IUS E-2024-070204 (ineficacia) - Jose Bolaño Cienfuego F.pdf;

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito allegar concepto del ministerio público dentro del proceso de la referencia.

<b>RAD. ÚNICO:</b>	47001-31-05-005- <b>2023-00322-00</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	JOSE BOLAÑO CIENFUEGOS
<b>DEMANDADO:</b>	COLPENSIONES, AFP's PORVENIR S.A y COLFONDOS S.A.
<b>IUS:</b>	2024-070204
<b>IUC:</b>	2024-3428719
<b>ASUNTO:</b>	INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL

Atte,

**Procuraduría 27 Judicial II para asuntos del trabajo y seguridad social**

Mauricio Andrés De Santis Villadiego

Procurador Judicial II

[mdesantis@procuraduria.gov.co](mailto:mdesantis@procuraduria.gov.co)

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 940 808

Calle 15 # 3-25 P 9, Santa Marta, Cód. Postal 47001

---

**De:** Juzgado 05 Laboral Circuito - Magdalena - Santa Marta <j05lcsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Enviado:** lunes, 29 de enero de 2024 9:58

**Para:** notificacionesjudiciales@porvenir.com.co <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; Buzon  
ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; Mauricio Andres De Santis Villadiego  
<mdesantis@procuraduria.gov.co>; Luis Carlos Pereira Jimenez <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>

**Cc:** Ceballos Viveros Abogados <notificacionesjudiciales@ceviabogados.com.co>

**Asunto:** NOTIFICACIÓN AUTO ADMISORIO DE DEMANDA RAD. No. 47001310500520230032200

 [47001310500520230032200](#)

Señor

JAIME DUSSÁN CALDERÓN y/o quien haga sus veces Representante Legal de la  
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES Bogotá, D.C

Señor  
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS

Señor  
MIGUEL LARGACHA MARTINEZ y/o quien haga sus veces Representante Legal de  
PORVENIR S.A

Señor  
MAURICIO ANDRES DE SANTIS VILLADIEGO  
Procurador 27 Judicial II Asuntos del Trabajo y la S.S.  
Ciudad.

Por medio de la presente comunicación, me permito notificarles el **AUTO ADMISORIO DE DEMANDA** de fecha 12 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, dentro del PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO JOSE ANTONIO BOLAÑO CIENFUEGOS CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A Y COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS RAD No. 47001310500520230032200. Dicha notificación se entenderá surtida a los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación. Vencidos los cuales, le comenzará a correr el término de diez (10) días para que ejerza el derecho de defensa y contradicción.

Para tal efecto, me permito adjuntarle el vínculo que contiene todo el expediente digital para los efectos de ley.

La presente notificación se realiza con fundamento en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 y demás normas legales pertinentes.

Atentamente,

Jonathan Pabón Saade  
Citador.  
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.  
\*\*\*\*\*NOTICIA DE CONFORMIDAD\*\*\*\*\* Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención,

difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION

Procuraduría 27 judicial II para asuntos del trabajo y seguridad social

Santa Marta, 31 de enero de 2024

**SEÑORES**

**JUZGADO PRIMERO LABORAL DE SANTA MARTA**

HJ. DR. HUGO HERNÁNDEZ

E. S. D

<b>RAD. ÚNICO:</b>	47001-31-05-005-2023-00322-00
<b>DEMANDANTE:</b>	JOSE BOLAÑO CIENFUEGOS
<b>DEMANDADO:</b>	COLPENSIONES, AFP's PORVENIR S.A y COLFONDOS S.A.
<b>IUS:</b>	2024-070204
<b>IUC:</b>	2024-3428719
<b>ASUNTO:</b>	INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL

**MAURICIO ANDRÉS DE SANTIS VILLADIEGO**, en mi condición de PROCURADOR 27 JUDICIAL II para asuntos del trabajo y seguridad social, estando dentro del término otorgado para el efecto, procedo a intervenir en este proceso en uso de mis facultades legales y constitucionales dispuestas en el artículo 277, numeral 7 de la C.N y 48 del D. 262 del año 2000, a efectos de defender el patrimonio público, el orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales.

**FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y  
JURISPRUDENCIALES EN RELACIÓN CON LA INTERVENCIÓN DEL  
MINISTERIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS LABORALES**

De conformidad con el Núm. 7º del Art. 277 de la Constitución Política, corresponde al Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus Delegados *“Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos o garantías fundamentales”*, por su parte el Art. 16 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala que *“El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos laborales de conformidad con lo señalado en la ley”*.

En la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la intervención del Ministerio Público se ejerce ante los Jueces Laborales del Circuito, Jueces Civiles del Circuito en aquellos lugares donde no existan laborales del circuito, las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El Art. 33 del Decreto – Ley 262 de 2000 establece que los Procuradores delegados ejercen funciones de intervención judicial ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, individuales o colectivos, de los trabajadores o pensionados o de las minorías étnicas. Igualmente, los faculta para presentar recursos de casación y revisión ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo consideren procedente. En relación con los Procuradores Judiciales, quienes además de tener la condición de agentes del Ministerio Público (Art. 41), el Art. 48 ejusdem dispone que actuarán ante las salas laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los juzgados laborales, los tribunales de

arbitramento a que se refiere el Código Sustantivo del Trabajo y demás autoridades que señale la ley, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, las garantías y derechos fundamentales, individuales o colectivos de los trabajadores y pensionados o de las minorías étnicas, Igualmente, intervendrán en los procesos laborales en que sean parte incapaces, cuando éstos no tengan quien los represente.

La intervención de la Procuraduría en su condición de Ministerio Público en la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, es reiterada en el Código Procesal del Trabajo al ordenar correr traslado de la demanda (Art. 74) y demanda de reconvenición (Art. 76). La jurisprudencia también se ha encargado de fijar el sentido y alcance de la referida intervención judicial, sobre este punto la Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia se pronunció en los siguientes términos:

“Para la Sala, es claro que el Ministerio Público por intermedio de sus procuradores judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para “intervenir” en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el artículo 16 del C. P. L.; por lo que podrán, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, por así autorizarlo la Constitución Política, (art. 118) y para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, (Numeral 7 del art. 277 de la C.P., art. 56 del Decreto 2651 de 1991, art. 10 de la Ley 25 de 1894, art. 48 del Decreto 262 de 2000).

Obviamente, esta intervención del Ministerio Público en los procesos laborales, no puede enmarcarse dentro de los esquemas fijados a las partes, por cuanto la Constitución Política la garantiza (artículo 277 numeral 7), “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. Lo que quiere decir que, frente a alguno de estos bienes jurídicos, protegidos por el Constituyente, en el evento que el procurador o sus delegados considere necesaria su intervención, lo podrá hacer, ya sea formulando alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, solicitando pruebas y participando en su práctica, o rindiendo conceptos e informes que requiera su defensa, pues como lo indica el precitado artículo 277 (ibídem), en su inciso final, “Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.” Actuación que deberá entenderse y acomodarse a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral.

En estas condiciones, no son de recibo los argumentos del censor, al pretender que se limite exclusivamente la intervención del Ministerio Público a “evitar que se haga (sic) fraudes y se pretende obtener un derecho indebido en el proceso”, como se indica en el recurso, o “únicamente como vigilante de los procesos”, según la trasccripción del salvamento de voto, pues la Constitución Política y la Ley, al desarrollar sus funciones, las garantizan en forma amplia y sin restricción”

Intervención que igualmente refrenda en la sentencia 76049 del 20 de junio de 2018.

Adicionalmente es importante precisar que la intervención de la Procuraduría General de la Nación en su condición de Ministerio Público es facultativa y discrecional, lo cual indica que no es obligatorio convocarla al proceso, ya que su actuación en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales se adelanta en cualquier etapa del proceso laboral y para los fines constitucionales correspondientes, sobre este particular la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró lo siguiente:

*“No resulta viable la solicitud del censor de citar al Procurador General de la Nación, para que comparezca al proceso y emita concepto, debido a que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 712 de 2001, la intervención del Ministerio Público en los procesos laborales no se produce a instancia de parte, sino que se trata de una facultad de la entidad. ”*

Desde el punto de vista de la oportunidad para ejercer la facultad de intervención judicial por parte de la Procuraduría General de la Nación en calidad de Ministerio Público, la Corte Constitucional en fallo de tutela la definió en los siguientes términos:

*“si bien la Procuraduría Judicial Laboral tuvo la oportunidad de intervenir en el trámite de primera instancia conforme lo establece el artículo 74 de la misma normativa adjetiva, esta circunstancia procesal no es suficiente para considerar que se trata de una posibilidad que se encontraba precluida, teniendo en cuenta que la Carta Fundamental prescinde de cualquier límite temporal para que el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes intervengan “en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales .” (Subrayado y resaltado fuera de texto original)*

Finalmente, el Parágrafo del Art. 46 del Código General del proceso establece que el Ministerio Público intervendrá como sujeto procesal especial con amplias facultades, entre ellas la de interponer recursos, emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas.

#### ANTECEDENTES DEL CASO

Se promueve demanda ordinaria laboral con miras a obtener la declaración de ineficacia de traslado de régimen pensional efectuado por el demandante, en consecuencia, se ordene el traslado de todos los aportes recibidos por la AFP PORVENIR S.A., a COLPENSIONES y a esta última a recibir los aportes y demás emolumentos. Costas y agencias en derecho.

Son hechos de la demanda los siguientes:

- (...) 1. El señor JOSE ANTONIO BOLAÑO CIENFUEGOS, nació el día catorce (14) de abril del año 1959.
2. El señor JOSE ANTONIO BOLAÑO CIENFUEGOS, ha cotizado más de 1.700 semanas al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN PENSIONES.
3. El señor JOSE ANTONIO BOLAÑO CIENFUEGOS, ha cotizado en el RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA y en el RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL.
4. El señor JOSE ANTONIO BOLAÑO CIENFUEGOS, cumplió la edad mínima requerida para su pensión de vejez el día catorce (14) de abril del año 2021.



5. Su afiliación inicial al sistema de seguridad social fue en el RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA en el año 1985.
6. Posteriormente, a mediados del año 1994 asesores del Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A., contactaron a mi poderdante con el fin de obtener su traslado al RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD.
7. Los asesores del Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A., le manifestaron a la demandante que el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL iba a desaparecer y que nadie se iba a responsabilizar del pago de su pensión de vejez.
8. De igual manera le expusieron que obtendría mayor número de ventajas para su futuro pensional en COLFONDOS S.A., por lo que mi mandante tomó la decisión de trasladarse al RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, confiando en las palabras de los asesores.
9. Luego de ello, a finales del año 2008 asesores del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. contactaron a mi mandante en su lugar de trabajo con el fin de obtener el traslado a dicho fondo.
10. Por lo anterior, le señalaron que de trasladarse podría obtener mayores beneficios al momento de reclamar su derecho a la Pensión de vejez, por ende, mi mandante, confiando en la palabra de los asesores decidió trasladarse a PORVENIR S.A.
11. El día veintiocho (28) de agosto de 2023, previa solicitud de mi mandante, el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. emitió Historia Laboral a favor de mi mandante.
12. El día tres (03) de octubre del 2023 se radicó ante el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., solicitud de formulario de afiliación y simulación pensional en ambos regímenes, sin obtener respuesta a la fecha.
13. El día tres (03) de octubre del 2023 se radicó ante el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., solicitud de Ineficacia de Traslado de régimen pensional, sin obtener respuesta a la fecha.
14. El día tres (03) de octubre del 2023, se radicó ante la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, solicitud de Historia Laboral.
15. El día cinco (05) de octubre del 2023, se radicó ante el Fondo de Pensiones y cesantías COLFONDOS S.A., solicitud de formulario de afiliación.
16. El día cinco (05) de octubre del 2023, se radicó ante el Fondo de Pensiones y cesantías COLFONDOS S.A., solicitud de ineficacia del traslado de régimen pensional.
17. El día once (11) de octubre de 2023, se allegó respuesta a la solicitud de ineficacia del traslado por parte del Fondo de Pensiones y cesantías COLFONDOS S.A.
18. El día once (11) de octubre de 2023, se allegó respuesta a la solicitud de formulario de afiliación por parte del Fondo de Pensiones y cesantías COLFONDOS S.A.
19. El día diecinueve (19) de octubre de 2023 se allegó historia laboral en el régimen de prima media con prestación definida, por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES.
20. El día ocho (08) de noviembre de 2023, se radicó ante la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, solicitud de ineficacia del traslado de régimen pensional.
21. El día nueve (09) de noviembre de 2023, la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES respondió de manera negativa la solicitud de ineficacia del traslado de régimen pensional. (...)"

## PLANTEAMIENTOS DE LA PGN

Procede el ministerio público a intervenir en el presente proceso ordinario laboral, realizando las siguientes acotaciones:

Como es sabido, la honorable sala de casación laboral de la corte suprema de justicia respecto de este tipo de procesos ha construido una posición o línea jurídica clara, concisa, uniforme y reiterada en el sentido de indicar que en estos asuntos, el engaño no solo se constituye en lo que afirma el asesor sino en el silencio que guardó este, quien debió tener la iniciativa de proporcionarle al futuro afiliado toda la información que resultare relevante para tomar la decisión y que esta falta de diligencia se traducía en un traslado de la carga de la prueba de los demandantes hacia los demandados. (Sentencias del 9 de septiembre de 2008, rads. 31989 MP. Dr. Eduardo López Villegas y rad. 31314, MP. Dra. Elsy Del Pilar Cuello). En igual sentido, se ha indicado en reiteradas jurisprudencias, v.gr, en la sentencia SL-1452 de 2019, que "(...) La aseveración del afiliado de no haber recibido información

Procuraduría 27 judicial II para asuntos del trabajo y seguridad social

*corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, por cuanto la documentación soporte del traslado debe conservarla en sus archivos, y en tanto es la obligada a observar el deber de brindar información y probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento (...)", posición reiterada de manera reciente en la sentencia SL-738 de 2023, que enseña "(...) la jurisprudencia de la Corte ha adoctrinado que cuando un afiliado alega que no recibió la información debida al cambiarse de modelo pensional, como lo hizo el promotor del proceso en la demanda inaugural, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca y, por ende, será la contraparte, en este caso, a la AFP demandada, quien tiene que acreditar que sí brindó la ilustración debida, dado que es quien está en posición de hacerlo (...)"*

Es imperativo recordar que el art. 13 de la ley 100 de 1993, dispone en su literal b) que "(...) la selección de uno de los regímenes previstos en el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o traslado (...)", quiere decir lo anterior que para que se materialice esa libertad y voluntariedad de escogencia del régimen pensional, el afiliado debe conocer suficientemente todos los aspectos sustanciales del régimen al cual va a afiliarse así como los alcances e implicaciones que dicho cambio pueda tener sobre sus expectativas pensionales, es decir, se requiere que el potencial afiliado tenga conocimiento amplio y suficiente sobre las características del sistema, los productos y condiciones de cada régimen pensional, conociendo las ventajas y desventajas de uno y otro régimen, información que a su vez debe ser oportuna, es decir, suministrada en los momentos que deben ser, a fin de buscar una libertad contractual y con la mayor garantía en cuanto a los beneficios que el posible afiliado pueda recibir.

A *contrario sensu*, no podrá predicarse un acto libre y voluntario cuando las administradoras de pensiones no cumplen con el deber de información; cuando no ilustran al eventual afiliado sobre la incidencia que pueda tener su decisión sobre sus derechos prestacionales, pues en tal caso, si bien es cierto existe una manifestación de la voluntad representada en el hecho de la escogencia del régimen pensional que deriva en el traslado de régimen (firma del formulario), no lo es menos que tal decisión no está basada en información real, clara y completa respecto de las implicaciones que está conlleva.

En lo atinente al deber de información de las AFP, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que las mismas, desde su creación, han tenido el deber de brindar información a los afiliados o usuarios respecto del sistema pensional, por ejemplo, en reciente pronunciamiento, sentencia SL-1055 de 2022, sostuvo, entre otras cosas:

*"(...) Es menester recordar que la Corte ha precisado de manera pacífica y reiterada que desde que se implementó el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones, se estableció en cabeza de las AFP el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados en forma clara, precisa y oportuna acerca de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas (...)"*

Así mismo, en la sentencia SL-1452 de 2019, el alto tribunal dijo "(...) En el campo de la seguridad social, existe un verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL 19447-2017), pues dicho procedimiento garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, que el usuario comprende las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen, esto es que, previamente a tal acto, aquel recibió información clara, cierta, comprensible y oportuna. Luego, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información (...)"





PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION

## Procuraduría 27 judicial II para asuntos del trabajo y seguridad social

Por lo anterior, la libre y voluntaria elección de un régimen pensional, no puede circunscribirse exclusivamente a la suscripción de un formulario por parte del afiliado, pues de lo dicho en precedencia en la citada jurisprudencia, se requiere que las administradoras hayan puesto a disposición del afiliado todas las herramientas dirigidas a formar con suficiencia el juicio del eventual afiliado de manera que el acto jurídico del traslado no tenga vicio alguno.

Colofón de lo esbozado, debe indicarse que la falta al deber legal de información como presupuesto de validez y eficacia del acto del traslado, concluye en un acto ineficaz por parte del afiliado. En tal sentido son innumerables los pronunciamientos que ha efectuado la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral-, como precedentes frente al tema; v.gr, sentencias de fecha 9 de septiembre de 2008, radicados 31989 y 31314, rememoradas en sentencia con Rad. No. 33083 de fecha 22 de noviembre de 2011, SL12136 de 2014, SL 19447-2017, SL-1452 de 2019, y de manera más reciente Sentencia SL 1695 de 2022, en la que sostuvo:

*“(...) la consecuencia prevista en el ordenamiento jurídico frente al incumplimiento de las AFP respecto del deber de informar que les incumbe corresponde a la ineficacia o la exclusión de todo efecto jurídico del cambio de régimen, la cual está consignada de manera expresa y diáfana en los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 (...)”*

Habida cuenta lo mencionado y descendiendo al *sub examine*, una vez analizadas las pruebas documentales obrantes en el plenario, para el ministerio público brilla por su ausencia algún elemento de prueba que permita concluir que la AFP demandada efectivamente hubieren cumplido con su deber de brindar información cierta, suficiente y oportuna al demandante en todo lo que conllevaba su traslado de régimen pensional. Por lo anterior, considera el ministerio público que la decisión de primera instancia debe ir encaminada a la concesión de las pretensiones de la demanda.

### EN CUANTO A LAS CONDENAS

El ministerio público solicita que el juzgador imponga en su fallo un término cierto (número de días) a la AFP PORVENIR S.A., en lo relativo a la devolución de los aportes y demás estipendios que se ordenen. Lo anterior, a efectos de evitar situaciones dilatorias que cercenen los derechos del demandante.

En igual sentido, el ministerio público pone de presente la necesidad de que se ordene de manera puntual a COLPENSIONES que reciba los aportes y demás emolumentos que traslade AFP PORVENIR S.A., y lo reactive en el RPMD al demandante, a efectos que la condena quede plenamente detallada.

Dejo a consideración del juez la presente intervención para que se tenga en cuenta al momento de desatar la instancia, si a bien lo tiene.

Atentamente,

MAURICIO ANDRES DE SANTIS VILLADIEGO

Firmado digitalmente por  
MAURICIO ANDRES DE SANTIS  
VILLADIEGO  
Fecha: 2024.01.31 10:11:11 -05'00'

**Procurador 27 judicial II para asuntos  
del trabajo y seguridad social**